

Honorable
JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO DE PITALITO
 (Reparto)
 E. S. D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: **FELIPE ANDRÉS CASTRO VÁSQUEZ**

ACCIONADA: **UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**
RUBEN DARIO VALBUENA VILLAREAL –
 Presidente del Comité Electoral y docente de planta
 de la Universidad Surcolombiana
ALBERTO POLANÍA PUENTES – Secretario General
 y docente de planta de la Universidad Surcolombiana

Respetuoso Saludo:

El suscrito **FELIPE ANDRES CASTRO VASQUEZ**, mayor y domiciliado en la ciudad de Pitalito-Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.215.082 expedida en Neiva, en mi calidad docente Visitante catedrático Categoría ASIENTENTE, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Surcolombiana, Sede Pitalito actuando en nombre propio, en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, muy respetuosamente presento ante este Honorable Despacho **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**, el señor **RUBEN DARIO VALBUENA VILLAREAL** en su calidad de Presidente del Comité Electoral y docente de planta de la Universidad Surcolombiana y el señor **ALBERTO POLANÍA PUENTES** en su calidad de Secretario General y docente de planta de la Universidad Surcolombiana, en razón a la negativa de habilitarme para votar en el proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025, por la vulneración de los derechos políticos fundamentales **ARTÍCULO 23.1 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO DE ELEGIR Y TOMAR PARTE EN ELECCIONES** (art. 40 núm. 1 y 2 C.N.), **DERECHO A LA IGUALDAD** (art. 13 C.N.), **DERECHO DE PETICIÓN** (art. 23 C.N.), entre otros, que se infieran y/o deduzcan del contenido de la presente demanda o en el trámite de la acción, además se tutele como **MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE**.

I. PARTES

ACCIONANTE: - FELIPE ANDRÉS CASTRO VÁSQUEZ

ACCIONADOS: - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

- **RUBEN DARIO VALBUENA VILLAREAL –** Presidente del Comité Electoral y docente de planta de la Universidad Surcolombiana
- **ALBERTO POLANÍA PUENTES –** Secretario General y docente de planta de la Universidad Surcolombiana

HECHOS

PRIMERO: Tal y como lo prevé el artículo 69 de la Carta Superior, en nuestro país se garantiza la autonomía universitaria y en esa medida, se otorga a las instituciones Universitarias, la facultad de darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.

SEGUNDO: En desarrollo de tal precepto se emitiría luego la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “*Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior*”, norma que

se encargaría de establecer un régimen especial para dichas instituciones, de cuyo contenido se desprende que efectivamente y a la luz de sus artículos 16, 19 y 57, la Universidad Surcolombiana corresponde a una de las categorías de la genéricamente denominadas, Instituciones de Educación Superior.

TERCERO: En ese contexto, es entonces la Universidad Surcolombiana un ente estatal u oficial y por ello mismo, un ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la que le permite, a la luz del artículo 57, en concordancia con los artículos 28, 29 de la Ley 30 de 1992 *Ibídem*, darse y modificar sus estatutos, todo lo cual facultó que el Consejo Superior Universitario emitiera el Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 1994, por el cual se expidió el nuevo Estatuto General de la Universidad Surcolombiana.

CUARTO: Dentro de aquella norma general se dispone, a propósito del proceso de designación de Rector (Artículo 29 modificado por el Artículo 3 del Acuerdo 015 de 2004), que “(...) *De los aspirantes inscritos, el Consejo Superior seleccionará tres (3) candidatos. Para poder conformar la terna cada uno de los aspirantes deberá contar con una votación mínima de seis (6) votos de los integrantes del Consejo Superior. La terna seleccionada se someterá a consulta por parte de los estamentos y, el candidato que obtenga la mayor votación ponderada, será designado Rector por el Consejo Superior Universitario (...)*”

QUINTO: Así mismo, este Estatuto Superior, dispone con relación a la Participación Estamentaria (Artículo 30 modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 015 de 2004) en el proceso de designación de Rector que “*Para efectos de la designación de rector, estarán habilitados para participar en la consulta estamentaria:*

1. *Estudiantes Regulares de programas académicos de educación superior propios de la universidad.*
2. *Docentes de Planta, ocasionales y **catedráticos**.*
3. *Egresados Titulados de Programas propios de la Universidad.(...)”* (negritas fuera del texto original)

SEXTO: El Consejo Superior Universitario en reglamentación de esta disposición superior, expidió el Estatuto Electoral (Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004) que en su artículo 10º, respecto a la participación estamentaria en proceso de Designación de Rector, reitera que las personas habilitadas para votar en la Consulta Estamentaria (que es de carácter vinculante) son las descritas en el Estatuto General (Artículo 30 modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 015 de 2004) entre las que se encuentran para el estamento docente: Docentes de Planta, ocasionales **y catedráticos**.

SÉPTIMO: Tenido como base este marco normativo, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana según Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019 aprobó el cronograma para el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 2020-2024.

OCTAVO: Con posterioridad, este mismo órgano directivo, mediante Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 2019 se modificó parcialmente el Artículo 1 del Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, es decir el cronograma electoral.

NOVENO: En razón a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 declarada por el Gobierno Nacional, el ente Universitario mediante Acuerdo 012 del día 19 de marzo de 2020, aprobó suspender a partir de la fecha, el cronograma del proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana.

DÉCIMO: Ya luego y con fecha 29 de enero de presente año, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 001 decidieron reanudar el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana, definiendo el siguiente cronograma:

ARTÍCULO 3º. Modificar el cronograma del proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2021-2025, así:

Nº	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
14	Publicación del listado provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co	08 de marzo de 2021
15	Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) ante la Secretaría General.	09 de marzo de 2021
16	Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte de la Secretaría General con el acompañamiento del Comité Electoral.	10 de marzo de 2021
17	Publicación del listado definitivo de electores (estudiantes, egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co	12 de marzo de 2021
18	Consulta estamentaria presencial con protocolos de bioseguridad.	18 de marzo de 2021
19	Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de reclamaciones y respuesta a las mismas por parte del Comité Electoral.	19 de marzo de 2021

20	Designación y posesión de Rector por parte del Consejo Superior Universitario.	08 de Abril de 2021
----	--	---------------------

DÉCIMO PRIMERO: El Rector encargado de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, a través de la Resolución P0205 del 18 de enero de 2021 decidió vincularme como docente catedrático Categoría Auxiliar, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para el segundo periodo académico del 2020 de la universidad Surcolombiana sede Pitalito

DÉCIMO SEGUNDO: En desarrollo del cronograma del proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana, el Comité Electoral el día 8 de marzo de 2021 publicó en el portal institucional www.usco.edu.co el **Listado provisional de Electores (docentes, graduados y estudiantes).**

DÉCIMO TERCERO: Al revisar dichos listados de provisionales de electores, me doy cuenta que mi número de cédula, no aparece en el listado provisional de docentes catedráticos, es decir que no he sido habilitado para votar en el proceso de elección mencionado.

DÉCIMO CUARTO: Siguiendo el cronograma del proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana, el día 9 de marzo de 2021 desde mi correo electrónico radiqué al Secretario General y al presidente del Comité Electoral, una reclamación administrativa solicitando ser incluida en el listado definitivo de electores como catedrático y conforme a la Resolución de vinculación que me hiciera el Rector encargado para el presente periodo académico.

DÉCIMO QUINTO: Ya el día 10 de marzo de 2021, recibí en un correo electrónico por parte de la Secretaría General de la Universidad Surcolombiana, adjuntándome la Circular 013 de 2020 expedida por el Secretario General y el Presidente del Comité Electoral y haciendo alusión a un concepto jurídico que no se nos dio a conocer en la misiva, respuesta que no resuelve de fondo mi solicitud, ya que como lo expresé anteriormente, mi vinculación se hizo por parte del Rector encargado muy claramente como **DOCENTE CATEDRÁTICO.**

DÉCIMO SEXTO: Que tanto el Señor **RUBÉN DARIO VALBUENA VILLAREAL** Presidente del Comité Electoral, como el Señor **ALBERTO POLANIA PUENTES** son docentes de planta del ente universitario y tienen un interés directo en restringir el

derecho al voto de los demás docentes catedráticos y ocasionales, ya que así estén en comisión de servicios ejerciendo cargos administrativos en la Universidad Surcolombiana, no pierden su calidad de docentes y les es permitido votar en estas elecciones programadas, teniendo estos un interés directo en restringir del voto de los demás colegas, ya que al ser la elección del Rector ponderada y porcentual, el que menos docentes participen les da más valor porcentual a su voto como docentes de planta (artículo 10º del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 - Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana). Es por lo anterior que le solicito señor Juez, que se vinculen a la presente tutela a estos dos señores de manera individual.

ARTICULO 10º. Participación Estamentaria. Para efectos de la designación de rector estarán habilitados para votar en la consulta estamentaria las personas señaladas en el artículo 4º del Acuerdo 015 de 2004.

La votación para la consulta será universal, secreta y ponderada. La ponderación se establece proporcionalmente sobre el número de votos válidos registrados por estamentos, conforme a los siguientes porcentajes:

a) DOCENTES	45%.
b) ESTUDIANTES	45%.
c) EGRESADOS	10%

Dentro del componente de ponderación de los docentes el voto de los profesores ocasionales y catedráticos equivaldrá a la mitad del voto de los docentes de planta.

PARÁGRAFO. La ponderación para cada candidato resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:

Para los docentes, el número total de votos válidos de los profesores por un candidato, dividido por el número del total de votos válidos de los profesores, multiplicado por el cuarenta y cinco por ciento (45%)

Para los estudiantes, el número total de votos válidos de los estudiantes por un candidato, dividido por el número del total de votos válidos de los estudiantes, multiplicado por el cuarenta y cinco por ciento (45%)

Para los egresados, el número total de votos válidos de los egresados por un candidato, dividido por el número del total de votos válidos de los egresados, multiplicado por el diez por ciento (10%)

DÉCIMO SÉPTIMO: De manera abrupta en esta oportunidad, me han cercenado mi derecho a participar en elecciones en la Universidad Surcolombiana como docente visitante, teniendo en cuenta que históricamente todos los docentes sin importar la denominación de su vinculación, han participado en distintos procesos de elección al interior de la Universidad Surcolombiana, entre los que se incluyen, la Elección del representante de los Docentes al Consejo de Facultad, Elección del Representante de los Docentes el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, y el mismo proceso de designación y elección de Rector en el año 2018.

DÉCIMO OCTAVO: Los medios de comunicación regionales han informado que somos cerca de 300 docentes excluidos del proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana, una vez se conocieron los listados provisionales de electores: *“Por un lado, cerca de 300 docentes de la Universidad Surcolombiana no podrían votar, lo que representa un 30% de los más de 900 profesores que laboran en la institución”*¹, *“Por un lado, cerca de 300 docentes de la Universidad Surcolombiana no podrían votar”*².

¹ Opanoticias, noticia Uno de cada tres docentes no podrá votar en la USCO, pero los muertos sí, 10 de marzo de 2021, link: <https://opanoticias.com/neiva/uno-de-cada-tres-docentes-no-podra-votar-en-la-usco-pero-los-muertos-si/15969>

² Tsmnoticias.com, noticia En la USCO podrán votar los muertos, pero no los docentes, 9 de marzo de 2021, link: https://tsmnoticias.com/en-la-usco-podran-votar-los-muertos-pero-no-los-docentes/?fbclid=IwAR0N_knqtiyBKTJOrDvF_cvBbpM0XiM2B7x3sHmWF0fNbDggRod2caT95ZI

DÉCIMO NOVENO: Como parte del estamento que corresponde a los docentes, considero vulnerado mis derechos fundamentales a derecho de elegir y tomar parte en elecciones, derecho a la igualdad y derecho de petición, lo que fuerza y justifica la intervención del órgano judicial para que, vía tutela, se ordenen las medidas indispensables para conjurar la afectación que se viene presentando para con mi participación en la elección del cargo más importante de la Universidad Surcolombiana.

CONCEPTO DE VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES

De conformidad con las disposiciones de la ley 30 de 1992, *por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior*, se indica que las universidades estatales u oficiales deben constituirse como entes universitarios autónomos, y como tales estarán vinculadas al Ministerio de Educación Nacional y sometidas a un régimen especial, gozando de autonomía académica, económica y financiera; dicha normativa, incluye la clasificación de los docentes al servicio de las mismas, la cual contempla tres categorías: docentes empleados públicos de carrera; catedráticos y profesores ocasionales.

Los profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etc., contemplados en el reglamento. Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el mismo tratamiento frente a sus derechos fundamentales y a sus derechos políticos en la toma de decisiones trascendentales para la institución como lo es elegir al rector en propiedad para el periodo 2021-2025. Otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-517/99, ha señalado que las distintas modalidades de vinculación del personal de profesores –por tiempo completo o medio tiempo, ocasionales y hora cátedra- obedecen a las necesidades y expectativas -algunas permanentes y otras circunstanciales- que tienen las instituciones para cumplir con sus objetivos académicos.

Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan derechos de los docentes ocasionales y horacátedra, en el caso particular, derechos políticos y mínimos de igualdad.

Si en realidad las funciones y condiciones de trabajo de los profesores hora cátedra independientemente de la modalidad de vinculación, son similares a las de aquellos que laboran para la institución por tiempo completo o medio tiempo, distintas únicamente en cuanto al tiempo de dedicación, es evidente que los primeros tienen también con la institución una verdadera relación laboral como quiera que prestan un servicio personal, obtienen a cambio una remuneración y existe una continua y notoria subordinación, razón suficiente para tener derecho al pleno ejercicio de sus derechos a la participación y toma de decisiones al interior de la Universidad.

Si todos los docentes hora cátedra independientemente la modalidad de vinculación, desarrollan una misma actividad: la formación académica de los educandos, no es posible que su vinculación a universidades públicas o privadas amerite un tratamiento diferente en aquellos aspectos alusivos a la posibilidad de tomar parte en las decisiones democráticas de la institución como es la elección del rector.

“Así, las universidades deben constituirse en espacios que, desde su quehacer fundamental, la producción de conocimiento y la formación integral de los individuos en el saber, contribuyan a la construcción de una sociedad más armónica, justa y equitativa. **Por eso ellas, en tanto organizaciones conformadas por comunidades académicas que integran los docentes, los estudiantes y el personal administrativo y de servicios que apoyan sus actividades, deben, más que cualquier otro tipo de organización, propender al desarrollo de las relaciones que surgen entre ellas y sus estamentos, se fundamenten en los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento de la diferencia, respeto a la dignidad de las personas, equidad y justicia.**”

Sobre la base de tales supuestos, ya en el plano de la relación docente-institución, la Corte señaló que las distintas modalidades de vinculación del personal de profesores –por tiempo completo o medio tiempo, ocasionales y hora cátedra- obedecen a las necesidades y expectativas -algunas permanentes y otras circunstanciales- que tienen las instituciones para cumplir con sus objetivos académicos.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha reconocido que “El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no solo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalará este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación^[6].”

De otra parte, esta Corporación Internacional señaló que “El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación^[7].”

En este organismo internacional se reconoce que: *“Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”¹⁸¹*

En conclusión, mal podría el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana y el Comité Electoral de la misma, desconocer el Bloque de Constitucionalidad, y los tratados internacionales que sobre derechos humanos son vigentes y reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

La elección de rector en propiedad con la exclusión de alrededor de 300 estaría violando los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos, como la participación de este sector de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, regulada por la Constitución Política y La ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

En lo que respecta al derecho a la participación política y el derecho a elegir y ser elegido existe diversos pronunciamientos jurisprudenciales sobre el alcance de este derecho la Corte Constitucional ha puntualizado el alcance de los derechos de tipo político. En la decisión T-117 de 2016 señaló:

“Colombia como Estado Social de derecho, organizado como república democrática, participativa y pluralista, consagró los derechos políticos como derechos fundamentales que permiten a toda la ciudadanía participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Tales principios se materializan mediante los diferentes mecanismos previstos en la ley y en la Constitución.”.

Por su parte el artículo 40 de la Carta Política consagra:

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

- 1. Elegir y ser elegido.*
- 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.*
- 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.*
- 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.*
- 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.*
- 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.*
- 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.*

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

En el marco de la autonomía universitaria reconocida en el artículo 69 C.P y regulada en la Ley 30 de 1994, la Universidad Surcolombiana mediante el Estatuto General, (Acuerdo número 075 del 7 de diciembre de 1994, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana), reconoció en la Comunidad universitaria (docentes, estudiantes, egresados), el derecho a participar en el gobierno universitario, mediante la participación democrática para la designación de rector mediante el proceso de una

“Consulta Estamentaria”, derecho que sería flagrantemente vulnerado con la exclusión arbitraria y caprichosa de un comité electoral que se basó en un cuestionado concepto jurídico desconociendo los tratados internacionales y los precedentes jurisprudenciales nacionales, actuación que sería ilegal y abiertamente arbitraria exponiendo a la universidad a un nuevo proceso de judicialización y ahondando en la crisis institucional que padece.

ARTÍCULO 3o. PREVALENCIA DE TRATADOS INTERNACIONALES. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen en el orden interno.

Desde esta perspectiva, es fundamental que las autoridades públicas respeten los derechos intangibles consagrados en el art 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, citada por el artículo 4 de la norma en comento que señala:

Frente al hecho en particular esta Corte, ha señalado que en ningún caso una autoridad administrativa podrá generar la violación del derecho que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegido. Esta Corte, precisamente estableció que el intérprete de la norma debe aplicar el principio ***pro favor libertatis***, cobijando por supuesto, el derecho a elegir y a ser elegido. En este sentido deberá entenderse que aplica plenamente para la Universidad Surcolombiana, la cual será considerada una autoridad que deberá **“proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales”**.

Violación flagrante al Derecho a elegir y ser elegido – Derecho a tomar parte en elecciones, la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable.

Como lo explique de manera detallada en los hechos, es evidente la vulneración de mis derechos políticos al cercenarme para esta elección en particular la posibilidad de ejercer mi derecho a elegir y al de tomar parte en las elecciones descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Carta Magna, ya que actualmente según un acto administrativo de la Universidad Surcolombiana que goza del principio de legalidad, me encuentro vinculado como Docente Catedrático según Resolución Rectoral P0554 del 18 de enero de 2021, pero la Universidad de manera arbitraria ha decidido excluirme de los listados de electores, situación que va abiertamente en contravía del pronunciamiento de la honorable Corte Constitucional sobre el asunto y que me legitiman para iniciar acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable Sentencia T - 232 de 2014:

“DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Alcance

Cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado, toda vez que el ordenamiento legal contempla un calendario definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al derecho a ser elegido, la protección busca permitir la participación del candidato que cumpla los requisitos señalados por la ley para postularse y que, en caso de llegar a ser elegido, se le permita cumplir el periodo para el cual fue elegido, salvo cuando por vía judicial la misma ha sido declarada nula o el mandato sea revocado en los términos de la Constitución.

DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Debe ser entendido en su doble dimensión derecho-función

El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado. "

El derecho de elegir y ser elegido como expresión del principio de participación democrática: Una de las principales expresiones de los derechos de participación en la conformación, el ejercicio y el control del poder político es la posibilidad de ejercer el derecho a votar en procesos democráticos, conforme al numeral 2º del artículo 40 de la Constitución. En la **Sentencia SU-544 de 2001**³, esta Corporación expresó que el referido derecho es de singular importancia dentro del ordenamiento constitucional, puesto que garantiza la posibilidad de lograr amplios espacios de legitimación democrática⁴.

Violación flagrante al Derecho a la igualdad

Derecho a la Igualdad. El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones del derecho a la igualdad: La formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y la material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.

Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la igualdad, bien sea en su modalidad formal o material, es necesario precisar si ante situaciones iguales se está otorgando un trato diferente, o por el contrario, si a personas o circunstancias distintas se les brinda un trato igual.

En el caso concreto, tanto el Estatuto General y el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana permiten la participación de todos los docentes que tengan la categoría de CATEDRÁTICOS que es la GENERALIDAD, es decir los docentes que dictamos hora cátedra, sin importar su especificidad relacionada con el procedimiento para su incorporación a la institución, es decir si fue a través de un banco de cátedra, como invitado, visitante, ad honorem, especial, sino que lo que le importa a la norma superior es que le está habilitado a votar a quien ejerza su labor docente a través de la hora cátedra, en forma interpretativa que sea Catedrático. Situación que en mi caso particular, se puede observar al realizar la lectura textual de la Resolución Rectoral que me vincula a la Casa de Estudios como DOCENTE CATEDRÁTICO y que goza del principio de legalidad.

Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) *la igualdad formal o igualdad ante la ley*, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) *la prohibición de discriminación*, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones *irrazonables*; y (iii) el principio de *igualdad material*, que ordena la adopción

³ M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

⁴ Reiterado en sentencia C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.

de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.

En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un *criterio de comparación* que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación. Sentencia C-178/14.

Violación flagrante al Derecho de Petición – Derecho a recibir una respuesta de fondo.

Como se puede observar en la respuesta emitida por el señor ALBERTO POLANÍA PUENTES en su calidad Secretario General de la Universidad Surcolombiana a mi reclamación administrativa, no reúne las calidades respuesta que debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva, sino que nos remite a todos los peticionarios una respuesta en masa, adjuntando una Circular administrativa y sin analizar las circunstancias particulares de la petición radicada y haciendo mención a un concepto jurídico que tampoco se adjunta a la misma. Es por lo anterior señor Juez que considero vulnerado mi Derecho a recibir una petición de fondo tal como lo ha señalado la honorable Corte Constitucional entre otras en Sentencia T-206/18, así:

“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

(...) El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente” [28]. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de

manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”

Tutela como Mecanismo Transitorio para Evitar un Perjuicio Irremediable

Para la Corte Constitucional en **Sentencia T-375/18**, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que *“permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”*. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es **idóneo y eficaz** conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como **mecanismo definitivo**; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un **perjuicio irremediable**, caso en el cual la acción de tutela procede como **mecanismo transitorio**.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe evaluarse en el contexto concreto. El análisis particular resulta necesario, pues en éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

Ahora bien, en cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo dispone el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, el cual indica: *“[e]n el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”*.

Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente. Sentencia C-132/18.

Sin duda, el mecanismo CONSTITUCIONAL DE LA TUTELA, se presenta porque se desatendieron los derechos fundamentales que en la presente demanda se han precisado, luego es éste mecanismo constitucional la única opción que tengo de PROTECCIÓN Y GARANTÍA EFICAZ de defensa de mis derechos la Igualdad, Derecho a elegir y tomar parte en las elecciones, derecho a una respuesta de fondo, los cuales son de naturaleza FUNDAMENTAL INDIVIDUAL, trae como consecuencia, un PERJUICIO IRREMEDIABLE.

Es pertinente enfatizar, que el mecanismo de protección constitucional que nos ocupa se propone como MECANISMO DE PROTECCIÓN TRANSITORIA, entendiéndola cuando se está ante un perjuicio irremediable siempre que se cumpla los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales. En este caso, se invoca es una PROTECCIÓN **TRANSITORIA**, pues aunque se cuenta con la existencia de otros medios de defensa judicial, los mismos, en éste momento, resultan INEFICACES al no gozar de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida⁵.

En definitiva, el MECANISMO DE TUTELA propuesto resulta ser efectivamente EFICAZ E IDÓNEO para garantizar con celeridad e inmediatez mis derechos fundamentales, lo que es coherente con la naturaleza y aspecto teleológico del artículo 86 de la constitución política y del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, parte del Bloque de Constitucionalidad que nos rige.

En el caso particular, es evidente que conforme el cronograma de elección de Rector en curso, es la acción de tutela el mecanismo más eficaz e idóneo ya que el día 12 de marzo de 2021 se publican los listados definitivos de electores y la próxima semana el día 18 de marzo, se realizarán las elecciones, que tiene la característica de ser vinculantes y que por la premura de tiempo, requiero de me sea garantizado el acceso a la justicia material con un procedimiento que goce de celeridad e inmediatez en la protección de mis derechos superiores, siendo el amparo de tutela en medio más competente.

MEDIDAS PROVISIONALES

Haciendo uso del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito ponderadamente oficiar de inmediato al CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, que suspenda transitoriamente el cronograma del proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2021-2025 establecido en el Artículo 3º del Acuerdo 001 del 29 de enero de 2021 expedido con el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, hasta tanto no se resuelva la presente Acción de Tutela, ya que la no inclusión de mi nombre en los listados definitivos de electores como docente catedrático, programada para publicarse el día 12 de marzo de 2021 y en la Consulta Estamentaria Presencial programada para el día 18 de marzo de 2021, generaría un perjuicio irremediable a mis derechos políticos constitucionales fundamentales a elegir y ser elegido, al Derecho a la Igualdad, así como a la institucionalidad del Ente Universitario generando futuros vicios de nulidad al proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2021-2025 acrecentando la ingobernabilidad en la Institución educativa, que ya reporta cuatro (4) rectores encargados en los últimos tres años, justamente por decisiones del Consejo Superior Universitario que viciaron procesos de elección de rector anterior.

Pongo de presente señor Juez, que la Consulta Estamentaria a realizarse el próximo 18 de marzo de presente año en la Universidad Surcolombiana, es de carácter vinculante, tal como lo dispone el artículo 29 Estatuto General de dicha Casa de Estudios, ya que el candidato que obtenga la mayor votación ponderada, será designado y posesionado Rector por el Consejo Superior Universitario, y que por ende se justifica la medida provisional solicitada como un mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable y que se expida una sentencia nugatoria por parte de su Señoría.

⁵Sentencia T-295 de 2008, con Ponencia de la Dra. CLARA INES VARGAS.

PRETENSIONES

Se tutelen a mi favor los Derechos Constitucionales Fundamentales: derechos políticos de Derecho de Elegir y Tomar Parte en Elecciones (art. 40 núm. 1 y 2 C.N.), Derecho a la Igualdad (art. 13 C.N.), Derecho de Petición (art. 23 C.N, entre otros, que se infieran y/o deduzcan del contenido de la presente demanda o en el trámite de la acción, además se tutele como Mecanismo Transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En consecuencia, se ordene a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, dejar sin efectos la respuesta recibida en mi correo electrónico el día 9 de marzo de 2021 remitida por el Secretario General de la Universidad Surcolombiana y se ordene incluirme en el listado definitivo de electores – docentes catedráticos el proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana; informando la decisión adoptada a quien corresponda.

Así mismo, dentro del trámite especial de tutela ordene la vinculación de los docentes catedráticos que se encuentren en iguales o similares condiciones a las mías, para que en caso de que sea necesario los efectos de la protección constitucional se extiendan a los eventuales coadyuvantes.

Solicitar la práctica de prueba documental (relación de listados provisionales y definitivos) de los docentes que siendo catedráticos (invitados, visitantes o ah honorem), históricamente han participado de las diferentes consultas democráticas para elegir los representantes de la comunidad universitaria en las distintas instancias institucionales. Así mismo, decretar la práctica de pruebas testimoniales de docentes catedráticos que ejercieron su derecho fundamental a elegir y se elegido durante estos procesos electorarios sin ser excluidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente Acción de Tutela se encuentra amparada en derecho por los siguientes: Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la presente, manifiesto, que no he interpuesto Acción de Tutela ante autoridad alguna por los mismos hechos y pretensiones.

PRUEBAS Y ANEXOS

- Copia de mi cédula de ciudadanía.
- Resolución Número P0205 del 18 de enero de 2021 USCO.
- Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_1994/acuerdo_075_1994.pdf
- Acuerdo 015 de 2004 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_015_de_2004.pdf
- Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_031_de_2004.pdf
- Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_043_de_2019.pdf

- Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 2019 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_055_de_2019.pdf
- Acuerdo 012 del día 19 de marzo de 2020 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_012_de_2020.pdf
- Acuerdo 012 del día 19 de marzo de 2020 CSU publicado en el link institucional: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/21/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_001_de_2021.pdf
- Reclamación administrativa radicada el día 9 de marzo de 2021 a la Secretaría General de la USCO.
- Respuesta del 10 de marzo de 2021 del Secretario General de la USCO.
- Circular 013 de 2021 Secretaría General y Comité Electoral.
- Opanoticias, noticia Uno de cada tres docentes no podrá votar en la USCO, pero los muertos sí, 10 de marzo de 2021, link: <https://opanoticias.com/neiva/uno-de-cada-tres-docentes-no-podra-votar-en-la-usco-pero-los-muertos-si/15969>
- Tsmnoticias.com, noticia En la USCO podrán votar los muertos, pero no los docentes, 9 de marzo de 2021, link: https://tsmnoticias.com/en-la-usco-podran-votar-los-muertos-pero-no-los-docentes/?fbclid=IwAR0N_knqtiyBKTJOrDvF_cvBbpM0XiM2B7x3sHmWF0fNbDggRod2caT95ZI

NOTIFICACIONES

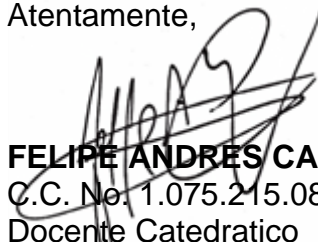
ACCIONANTE: Para efectos de notificaciones, ruego se me remita y/o comunique cualquier decisión Carrera 5 N° 6-59 oficina 207 Edificio Orquídea real Pitalito Huila. y autorizo recibir respuesta a través del correo electrónico en la siguiente dirección: Felipe.castro@usco.edu.co. O al correo electrónico felipecastro.abogado@gmail.com

ACCIONADOS: Para efectos de notificación judicial, la **UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA** ha dispuesto del correo electrónico institucional: notificacionesjudiciales@usco.edu.co

El señor **RUBEN DARIO VALBUENA VILLAREAL** en su calidad de Presidente del Comité Electoral y docente de planta de la Universidad Surcolombiana, puede ser notificado a los correos electrónicos institucionales: comitelectoral@usco.edu.co y rubendario@usco.edu.co

El señor **ALBERTO POLANÍA PUENTES** en su calidad de Secretario General y docente de planta de la Universidad Surcolombiana, puede ser notificado a los correos electrónicos institucionales: secretariageneral@usco.edu.co y alberto.polania@usco.edu.co

Atentamente,



FELIPE ANDRES CASTRO VASQUEZ

C.C. No. 1.075.215.082 expedida en Neiva

Docente Catedrático Facultad de Ciencias jurídicas y políticas

Universidad Surcolombiana.